El Maipo



El escudo del monroísmo: la marea de la ira y el orden neocolonial en América Latina. Por Carlos Ron

Posted on Marzo 16, 2026

La Cumbre de Miami

El 7 de marzo de 2026, en el Trump National Doral Golf Club de Miami, Donald Trump inauguró la “Cumbre Escudo de las Américas”, convocando a líderes de derecha de América Latina y la “Marea de la ira” del Caribe en torno a lo que él denominó una “coalición contra los cárteles”. La receta de Washington se expresó sin rodeos: “La única forma de derrotar a estos enemigos es desatando el poder de nuestras fuerzas armadas”. El monroísmo está a la ofensiva, y la Marea de la ira se ha convertido en su escudo – no contra los cárteles, sino contra los proyectos de soberanía nacional centrados en el pueblo.

Los líderes invitados – Milei de Argentina, Paz de Bolivia, Bukele de El Salvador, Noboa de Ecuador, Asfura de Honduras, Peña de Paraguay, Chaves de Costa Rica, Mulino de Panamá, Abinader de la República Dominicana, Ali de Guyana, la primera ministra Persad-Bissessar de Trinidad y Tobago, y el presidente electo Kast de Chile – se sitúan todos a la derecha del espectro político. Destacó la ausencia de los líderes progresistas de las economías más grandes de América Latina: Brasil, Colombia y México. Sobre México, Trump declaró: “Los cárteles están dirigiendo México. No podemos permitir eso”.

Las imágenes de Miami contrastaron radicalmente con las reuniones regionales de las últimas dos décadas, en las que los líderes latinoamericanos se reunían en pie de igualdad para construir marcos de coordinación y cooperación política – como el Consejo de Defensa de América del Sur y el Consejo de Salud de América del Sur, de la UNASUR, por ejemplo. En Miami, los presidentes reunidos compitieron en un espectáculo publicitario para ver quién se situaría más cerca de Trump en la fotografía o quién se quedaría con el bolígrafo conmemorativo con el que firmó los acuerdos.

Cincuenta años de "guerra contra las drogas": una política fallida

Resulta alarmante que esta coalición se comprometa a una colaboración más profunda con los Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, dado el balance de la política de control de drogas liderada por los Estados Unidos. La serie de estudios *Addicted to Imperialism*, coproducida por el Instituto Tricontinental de Investigación Social junto con el Observatorio Lawfare, el CEPDIPO y COCCAM, expone el historial con una claridad devastadora: tras más de cincuenta años de "guerra contra las drogas", la DEA reconoció ante el Congreso de los Estados Unidos que solo los cárteles de Sinaloa y Jalisco cuentan con "asociados, facilitadores e intermediarios en los 50 estados de los Estados Unidos». Este es el resultado de medio siglo del esfuerzo de control de drogas más costoso y militarizado de la historia de la humanidad.

Los datos agregados confirman el veredicto. En 2023, 316 millones de personas consumieron drogas ilegales en todo el mundo, lo que supone un aumento del 22% con respecto a la década anterior. El Gobierno de los Estados Unidos ha invertido más de 10.000 millones de dólares en iniciativas antinarcóticos en Colombia desde 1999, y, sin embargo, la producción de cocaína se triplicó con creces entre 2013 y 2017. El estudio muestra que entre 2016 y 2022 —un período de intensa cooperación entre los Estados Unidos y Colombia—la producción potencial de cocaína en Colombia aumentó de 1053 a 1738 toneladas métricas, mientras que las incautaciones y la erradicación forzada también aumentaron simultáneamente. Más erradicación, más producción. Más cooperación, más cocaína.

Ecuador: un ejemplo dramático

Ningún caso contemporáneo ilustra esto de manera más cruda que Ecuador, cuyo presidente Noboa ocupó un lugar destacado en el evento de Trump en Miami. Tal como documenta el estudio *Addicted to Imperialism*, Ecuador ha sido objeto de un proceso de injerencia extranjera desde al menos 2017, lo que ha provocado un marcado deterioro del estado de derecho social y una progresiva militarización de la seguridad pública en torno a cuatro ejes estructurales: la injerencia extranjera, la liberalización económica y la deuda externa, el deterioro institucional y la securitización de los problemas sociales.

Bajo el mandato de Moreno (2017-2021), Ecuador restableció los lazos de seguridad con los Estados Unidos que Correa había suspendido, reincorporándose a los ejercicios del Comando Sur. Bajo el mandato de Lasso (2021-2023), se firmó un Memorando de Entendimiento, inspirado explícitamente en el Plan

Colombia, con un presupuesto previsto de 3.100 millones de dólares a lo largo de siete años, lo que reposicionó a Ecuador como el principal receptor de la Financiación Militar Extranjera de los EE. UU. en la región, con 310 millones de dólares entre 2022 y 2023, superando a Colombia.

Bajo el mandato de Noboa, tras el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante la campaña de 2023, la general Laura Richardson, del Comando Sur de los EE. UU., viajó personalmente a Ecuador para acordar un "plan conjunto" que incluía el despliegue de personal militar estadounidense con plena inmunidad frente a la justicia ecuatoriana – las mismas condiciones aplicadas en Colombia –, inmediatamente bautizado como "Plan Ecuador". La tasa de homicidios alcanzó los 47 por cada 100.000 habitantes en 2023. El Plan Fénix de Noboa desplegó a las fuerzas armadas en las calles de las ciudades, construyó megacárceles siguiendo el modelo de Bukele y buscó una reforma constitucional para permitir instalaciones militares extranjeras, como la base en las Galápagos. La militarización de la seguridad pública no ha resuelto la crisis. La ha agravado, al tiempo que ha subordinado la soberanía de Ecuador a la agenda hemisférica de Washington.

Doscientos años después de Panamá: la brújula anfictiónica

El marco militarizado de la guerra contra las drogas no protege a las poblaciones del narcotráfico. Protege a las élites políticas de la rendición de cuentas democrática y normaliza el autoritarismo bajo la bandera de la seguridad. *Adictos al imperialismo* documenta que en 2008, el 35% de los senadores colombianos y el 13% de los representantes de la Cámara de Diputados estaban bajo investigación por vínculos con grupos paramilitares que simultáneamente dirigían operaciones de narcotráfico. La "guerra contra las drogas" no desmanteló estas redes. Les proporcionó cobertura política.

Esto no es sorprendente si recordamos los orígenes de este marco. El principal asesor de política interna de Nixon admitió décadas más tarde que la declaración de 1971 que calificaba a las drogas como "enemigo público número uno" tenía un objetivo diferente:

La Casa Blanca de Nixon, a partir de entonces, tenía dos enemigos: la izquierda pacifista y la población negra… Sabíamos que no podíamos ilegalizar el hecho de estar en contra de la guerra o de ser negro, pero al lograr que el público asociara a los hippies con la marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar a ambos con dureza, podíamos desestabilizar a esas comunidades. Podíamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en los noticieros de la noche. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí.

A escala regional, desde el Plan Colombia hasta el Escudo de las Américas, la supuesta lucha contra los cárteles ha servido sistemáticamente de pretexto para el gasto militar, el intervencionismo y el desplazamiento de poblaciones de sus territorios. El ejemplo más reciente es Venezuela: el secuestro de su presidente en ejercicio, Nicolás Maduro, se presentó como una operación antidroga, pero rápidamente

se reveló como un mecanismo para reinsertar a Venezuela en la economía petrolera de Washington.

En 1826, Simón Bolívar convocó el Congreso Anfictiónico de Panamá con una visión de extraordinaria claridad: una confederación de repúblicas latinoamericanas que actuaran colectivamente, garantizando su independencia y negociando con las grandes potencias desde una posición de igualdad soberana. La Marea de la ira es la antítesis actual de ese espíritu. En Miami, Trump declaró: “No permitiremos que la influencia hostil extranjera se establezca en este hemisferio – incluido el Canal de Panamá”—, mientras el presidente de Panamá, Mulino, permanecía sentado entre el público y escuchaba en silencio. Es el monroísmo en su forma más descarada.

América Latina y el Caribe – sus movimientos, partidos y gobiernos progresistas – necesitan una agenda regional renovada de soberanía y cooperación concreta, que incluya instituciones capaces de coordinar una respuesta soberana a la economía de la droga. El precio de un kilogramo de cocaína pasa de aproximadamente 1.500 dólares en el punto de producción en Colombia a 20.000 dólares en los Estados Unidos. Los productores – los campesinos – captan menos del 1% del valor del mercado mundial de la cocaína. Mientras tanto, más del 70% de las armas que alimentan la violencia de los cárteles en México se fabrican y proceden de los Estados Unidos. La guerra contra las drogas, en su versión hipermilitarizada, crea el marco institucional precisamente para el tipo de problemas de salud, corrupción e impunidad contra los que dice luchar.

El primer cuarto de este siglo ofrece pruebas de que una ambición diferente produce resultados. Operación Milagro devolvió la vista a más de 3 millones de personas. Los programas de alfabetización del ALBA erradicaron el analfabetismo en Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador. La unidad regional con el verdadero propósito de reafirmar la soberanía y garantizar una vida digna para la población no debe abandonarse en favor de políticas fallidas y maniobras publicitarias.

*Carlos Ron es coordinador adjunto de la oficina de Nuestra América del Instituto Tricontinental de Investigaciones Sociales.

El Maipo/Globetrotter

Nota: El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial El Maipo.